

### III. BARCELONA

Marc Martí-Costa, Mariela Iglesias,  
Joan Subirats y Mariona Tomàs

#### **Introducción**

La evolución de la ciudad de Barcelona se define en cuatro fases. En primer lugar, el desarrollo de la ciudad en el marco de la dictadura franquista y la transición hacia una sociedad democrática, período marcado por la explosión urbana y la acumulación de déficits urbanísticos. En segundo lugar, el momento de mayor transformación de la ciudad, iniciado con el primer gobierno democrático y culminando con la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. La resaca olímpica en los años 1990 plantea unos nuevos retos al desarrollo de la ciudad, que se vuelca hacia las estrategias de marketing y cultura, como ilustra la tercera fase. Finalmente, en la cuarta etapa se muestra cómo el cambio de siglo obliga a la ciudad a responder a los efectos del proceso de globalización mediante políticas de proximidad y nuevas estrategias a escala metropolitana.

Existen elementos comunes en las cuatro fases, como la importancia del liderazgo político, la complicidad con actores de la sociedad civil y el replanteamiento continuo de la validez del modelo de ciudad y de su escala. El caso barcelonés ilustra también la voluntad para superar obstáculos políticos, con mayor o menor acierto según los distintos grupos, y el esfuerzo para mantener la ciudad en el mapa internacional, con los efectos positivos y negativos que esta decisión conlleva.

## De la ciudad desarrollista a la ciudad de la transición (1957-1979)

Esta etapa la subdividimos en dos momentos: el primero, de 1957 a 1975, corresponde a la ciudad desarrollista; el segundo, de 1975 a 1979, a la ciudad de la transición.

La subetapa de la ciudad desarrollista, como su nombre indica, se caracteriza por el gran crecimiento de Barcelona y los municipios colindantes. «La gran Barcelona de Porcioles», ideada por el alcalde principal del franquismo, José María Porcioles (en el poder entre 1957 y 1973), se construye mediante grandes operaciones urbanísticas especulativas, aprovechando la ausencia de democracia y la necesidad real de viviendas<sup>1</sup> (Huertas, 1997). En efecto, esta etapa se caracteriza por el crecimiento sostenido de la población barcelonesa, que alcanza su nivel máximo en 1981, con 1.752.627 de personas. Este crecimiento se explica sobre todo por el aumento de la inmigración procedente de tierras interiores y del resto de España, en edad laboral y reproductiva, que se instalan en la capital y sus alrededores en una tendencia iniciada a principios de siglo, como sucedió entre 1900 y 1930 cuando se duplicó la población de Barcelona. El período de crecimiento económico y de industrialización impulsado por el Plan de Estabilización de 1959 es especialmente beneficioso para las ciudades españolas, Barcelona entre ellas (Ferrer y Nel-lo, 1991).

La ciudad desarrollista de Porcioles se caracteriza por la extensión del modelo de barrios de «polígonos» públicos y privados hacia las periferias de la ciudad y el área metropolitana (Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet, Badalona, etc.) sin las condiciones e infraestructuras necesarias. Se trata de barrios aislados que acumulan déficits urbanísticos tales como la baja accesibilidad en transporte público, la falta de equipamientos, calles sin asfaltar, etc. donde se concentra la población con niveles educativos bajos y escasos recursos económicos. A estos barrios planificados cabe añadir la proliferación de áreas marginales de urbanización, cons-

---

1. En el conjunto del área metropolitana de Barcelona se construyeron, entre 1950 y 1975 más de 700.000 viviendas nuevas (Ferrer y Nel-lo, 1991: 17).

truidas ilegalmente en la periferia de la ciudad, que contrastan con los barrios burgueses de Pedralbes-Las Corts y Sarrià-Sant Gervasi. Las desigualdades de nivel de renta entre los barrios son notables y es evidente la existencia de una pluralidad de Barcelonas (Bohigas, 1977). En efecto, en este período pre-democrático adquieren especial relevancia las luchas urbanas y los barrios periféricos serán el germen de las reivindicaciones vecinales de los 1970 y de la creación de los movimientos sociales urbanos. El movimiento vecinal representa el espacio de confluencia de los grupos que se oponen al franquismo, como los sindicatos, partidos de izquierdas y también profesionales comprometidos como arquitectos, urbanistas, economistas, abogados, etc., que se movilizan para dignificar los barrios. Las principales reivindicaciones son la mejora de los equipamientos y servicios, así como la reacción a grandes planes especulativos y la elaboración de «planes populares» (planes alternativos al ayuntamiento) (Bonet y Domingo, 1998). Este movimiento cristaliza en 1972 con la creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB).

El cambio de ciclo económico marca el final de esta subetapa. A principios de 1970 se constata la crisis del sector textil y el inicio de la decadencia de zonas industriales tanto en el interior de Barcelona como en el exterior. Se inicia el proceso de especialización económica, con la terciarización del centro y la (re)industrialización de la periferia. Sabadell, Terrassa, Rubí, Cerdanyola o Mataró que fueron enclaves de la primera industrialización se erigen como principales subcentros económicos, albergando las actividades relacionadas con el sector metalúrgico y los sectores emergentes como el farmacéutico, artes gráficas, alimentación y construcción. (Sánchez, 1991). En este momento se acentúa el proceso de metropolización producido por la relocalización industrial: la ciudad central pierde su carácter industrial por el que se había ganado el apodo del Manchester catalán y se crean grandes zonas industriales en la periferia, por ejemplo en el barrio de Bon Pastor y Zona Franca (Ferrer y Nel-lo, 1998).

La Barcelona de finales de los setenta es el centro de una aglomeración metropolitana con más de tres millones de habitantes. La descentralización de actividades económicas hacia los suburbios se acompaña de una creciente movilidad residencial, que será una

constante en la siguiente etapa (años 1980) (Font et al., 1999). Para poder prestar los servicios comunes metropolitanos (transporte, agua, gestión de residuos) se crea en 1974 la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, formada por 27 municipios. Esta autoridad metropolitana tiene también la misión de implementar un plan de urbanismo metropolitano. El Plan General Metropolitano (PGM) se aprueba en 1976 y supone una revisión profunda de los criterios de zonificación y desarrollismo en que se basaba el anterior Plan Comarcal de 1953 (Ferrer, 1997). La redacción del PGM representa una arena más de las luchas urbanas y de conquistas ciudadanas. Las asociaciones de vecinos presentan millares de alegaciones para reivindicar la ausencia de zonas verdes y equipamientos proyectados, la prioridad dada al transporte privado o las vías de circulación que atraviesan tejidos antiguos consolidados. También el PGM genera resistencias por parte de los propietarios del suelo, ya que el plan prevé recortar las edificabilidades anteriores y normalizar el mercado del suelo urbano (Huertas, 1997).

La segunda subetapa del período de transición abarca desde la muerte de Franco en 1975 hasta las primeras elecciones democráticas en 1979. En Barcelona, la figura que encarna el pasaje a un sistema democrático es el alcalde Josep Maria Sociás Humbert (1976-1979), después de los breves mandatos de Enric Masó y Joaquim Viola. Sociás Humbert y su equipo facilitan la posterior implementación de las políticas democráticas, sobre todo, comprando suelo y preparando la transformación urbanística de la ciudad. Por ejemplo, este es el caso de los terrenos de la España Industrial, que son comprados por el ayuntamiento para convertirlos después en un parque urbano, gracias a la presión de las asociaciones de vecinos del barrio de Sans (Huertas y Andreu, 1996). En estos años se realizan importantes reformas institucionales que dismantelan el régimen franquista y que construyen el nuevo sistema político democrático: la aprobación de la Ley para la Reforma Política, la legalización de los partidos y celebración de las primeras elecciones democráticas, la redacción y aprobación de la constitución española, nuevas elecciones, etc. En el ámbito local, los líderes vecinales, las fuerzas políticas opositoras y también los profesionales ligados al debate urbano se preparan para el nuevo contexto político, que se inicia con las primeras elecciones democráticas locales, en abril de 1979.

En resumen, de este período pre-democrático destacamos los años setenta, caracterizados por una alianza ciudadana entre asociaciones de vecinos, líderes políticos y profesionales, que reivindica no solo ayuntamientos democráticos sino también un urbanismo con vocación pública que cambie el modelo desarrollista del franquismo. Detrás de las reivindicaciones hay un proceso de reflexión que se alimenta de la acumulación de propuestas, planes y proyectos anteriores, aprobados o no. La coalición política-ciudadana-profesional se mantiene durante muchos años y lidera la transformación de la Barcelona democrática, siendo una seña de identidad de la cultura y del *know-how* barcelonés (Borja, 2006).

### **Gobiernos democráticos locales: de la ciudad democrática al proyecto olímpico (1979-1992)**

En los 13 años que van desde las primeras elecciones democráticas locales hasta la celebración de los Juegos Olímpicos (JJOO) se produjeron veloces e intensas transformaciones en la ciudad que inauguraron un estilo de políticas, planificación y gestión que luego será bautizado como «Modelo Barcelona». En los primeros años ochenta los cambios fueron impulsados por la herencia de reivindicaciones que había dado forma a la agenda pública local y las convertía en ineludibles en un contexto de apertura democrática. Tras los largos años de organización y lucha de los Movimientos Sociales Urbanos, «la ciudad democrática» se erigió como espacio de oportunidad para poner en práctica aquello largamente proyectado. En un segundo momento, la candidatura a los JJOO del año 1986 significó un nuevo impulso y la preparación de los juegos se convirtió, retomando la tradición histórica de la organización de grandes eventos, en la oportunidad de realizar intervenciones de mayor escala y complejidad. Hacia 1992, el proyecto olímpico había consolidado una nueva organización de la ciudad en perspectiva de largo plazo, una élite política local y con ello una renovación en la forma de pensar y hacer ciudad, que se convirtió en una marca registrada de Barcelona que se profundizaría en la etapa posterior. La fuerte presencia y liderazgo del sector público local en la puesta en marcha de una nueva organización y proyecto de ciudad caracteriza a toda la etapa. Desde un ayuntamiento de izquierdas (PSC en coalición con IVC

y con ERC), primero Narcís Serra (1979-1982) y tras su marcha al Gobierno central, Pasqual Maragall (1982-1997) impulsaron desde gestiones carismáticas una nueva agenda pública local que tenía a la ciudad como objeto e instrumento de políticas.

De esta manera, los primeros proyectos se vincularon a la concepción de un urbanismo ciudadano que basaba sus intervenciones en el espacio público como instrumento de distribución social. A partir de una política de compra de suelo que aprovechó la baja presión especulativa debido a la crisis económica y desde una estrategia de «acupuntura urbana», que posteriormente cristalizó en un programa de desarrollo urbano más complejo, se dio especial importancia a la recuperación de los espacios públicos, partiendo de una perspectiva de regeneración que revalorizaba la escala barrial. Era el momento de las pequeñas actuaciones en plazas y parques, que forjaron la idea de «recuperación de la ciudad» (Busquets, 2004). Las intervenciones de este tipo se multiplicaron por los diferentes barrios de la ciudad y pese a los bajos presupuestos municipales, el impacto simbólico de la presencia pública fue contundente. En los proyectos de mejora urbana es evidente el cambio de orientación en la planificación urbanística. Se abandonó el concepto de plan disociado de proyecto arquitectónico y se apostó por los proyectos urbanos como forma de actuación en la escala intermedia revalorizando el papel de los barrios en el diseño de la ciudad. De esta época es la aparición de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) como instrumento de intervención urbanística.

El proyecto de ciudad de los primeros años democráticos no podría comprenderse si no se hace referencia al protagonismo de arquitectos, urbanistas y militantes como Oriol Bohigas, Manuel de Solà Morales, Jordi Borja, Josep M. Abat, quienes desde espacios de reflexión y vinculación con los movimientos sociales en la etapa de dictadura y transición tales como la *Revista CAU* o el CEUMP entre otros, habían madurado un profundo diagnóstico de la ciudad y un sistema de actuación que la nueva estructura de oportunidades políticas les permitía poner en práctica desde cargos de responsabilidad en la administración local (Borja, 1995; 2006). De esta manera se puede hablar de la conformación de una élite política local que caracterizaría a Barcelona a lo largo de los años.

Pero el urbanismo no era la única prioridad de este momento, y desde la perspectiva de los servicios personales, se dio especial importancia a la dotación de equipamientos para cubrir el déficit acumulado. De hecho, la fuerte reforma de la administración local que supuso el proyecto de descentralización en los actuales diez distritos de la ciudad (1979-1991) comenzó por los servicios sociales y culturales con el objetivo de ajustarse a las necesidades de cada barrio con una tendencia hacia la territorialidad en la detección de necesidades y provisión de las políticas. Precisamente fue la descentralización distrital uno de los proyectos más destacables de estos primeros años en lo que hace a generar un diseño institucional que facilitara la concepción integral de las intervenciones, la proximidad de los diagnósticos y demandas y la visibilidad y presencia pública en zonas periféricas y populares de la ciudad.

Estas estrategias austeras pero que priorizaban la escala próxima no fueron ajenas al fuerte contexto de crisis económica, sino que eran sensibles a las prioridades ciudadanas y surgieron a partir de la propia crisis. Entre 1979 y 1986 la ocupación había caído en un 25%, especialmente en sectores como la industria y la construcción (Trullén, 1991). La ciudad perdía a la industria como espacio de producción pero era el comienzo de un proceso en que Barcelona se consolidó como centro direccional industrial metropolitano. Es claro que el proceso traspasaba la escala municipal y debe entenderse en un contexto de reajuste de la industrialización hacia una escala territorial más amplia. Iniciativas como el Plan de reindustrialización del Cinturón de Barcelona (ZUR) que fomentaba la reactivación de la industria a través de la incorporación de innovación tecnológica en el producto o en el proceso dan cuenta de la renovación industrial en un escenario más amplio (sectores como electrónica, informática, auxiliar del automóvil, industria de plásticos, etc.).

El reajuste de escala territorial de la industria, la crisis económica y las estrategias residenciales frente al encarecimiento del suelo y del precio de la vivienda de mediados de los ochenta, impactaron en la estructura poblacional de la ciudad. A mediados de esta década y a diferencia de etapas anteriores, Barcelona perdía 200.000 habitantes en un proceso de movilidad hacia la región metropolitana. De igual manera disminuyó la tasa de emancipación de los jóvenes entre 25 y

34, y la de natalidad comenzando también en esta etapa el proceso de envejecimiento progresivo de la población.

Sin embargo, el año 1986 introdujo nuevos procesos que impactaban en la dinámica de la ciudad: la crisis económica local retrocedió acompañando a un proceso de reactivación global y a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). Así el ciclo económico que se inauguró denotaba la definitiva conformación de una nueva escala económico-territorial extendida hacia la región metropolitana con una clara descentralización industrial y residencial hacia la segunda corona metropolitana. En este período precisamente se realiza la construcción del tercer cinturón o del eje del Llobregat, así como la consolidación de Igualada, Manresa, Vic o Vilafranca como nuevos subcentros potentes. Entre 1986 y 1991 la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) tuvo un crecimiento del 30% (Trullén, 1998) pero la potenciación global del sistema productivo barcelonés fue con un control limitado del capital local ya que en 1988 la mitad de las grandes empresas eran de capital extranjero (Sánchez, 1991).

Si bien la estructura de inversiones se decantó en la construcción (56,8%) y el sector químico, metalúrgico y de alimentación después de la reestructuración, otros sectores más innovadores mejoraron notoriamente. Por ejemplo se percibe un crecimiento del 21,3% en el sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones. Por otro lado comienza la implantación de las grandes superficies industriales de capital extranjero en áreas peri urbanas.

La reconversión funcional del territorio y la economía hacen evidente el cambio de escala de la ciudad que se produjo en esta etapa. Sin embargo, este proceso puso en evidencia la complejidad de la gobernabilidad metropolitana. Tras la transformación de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona en la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) formada por los 27 municipios y con competencias en urbanismo (implementar el PGM), transporte público, abastecimiento de agua y su depuración, y tratamiento de residuos, el crecimiento del presupuesto y de la acción de la CMB en los años ochenta generó una rivalidad política con el Gobierno de la Generalitat en manos del partido nacionalista de centro derecha *Convergència i Unió*. De hecho, en el año 1987, a contramano del fuerte proceso de integración metropolitana, el Parlamento de Ca-



taluña disolvió la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) en una clara estrategia para desactivar el contrapoder que suponía un organismo de este tipo con un área metropolitana de clara inclinación socialista. Es entonces cuando a partir de la nueva Ley de organización Territorial de Cataluña (1987) se crean las comarcas en toda la Comunidad Autónoma.

A partir de la disolución de la CMB en el área metropolitana se crean dos nuevas entidades de carácter sectorial: la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos, conocida también como Entidad Metropolitana del Medio Ambiente (EMA). La primera incluyó 18 municipios y se encargaba del transporte público para los habitantes de la zona, mientras que la segunda agrupó 33 municipios y se ocupaba de abastecer y depurar el agua, tratar los residuos, etc. Las competencias en materia de urbanismo de la CMB fueron transferidos a la Administración de la Generalitat y, en menor medida, a los ayuntamientos. Un año después, la mayor parte de los municipios que pertenecían a la desaparecida CMB se integraron de manera voluntaria en la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana (MMAMB) (23 municipios), con la finalidad de mantener los servicios comunes y elaborar proyectos de desarrollo conjunto.

Sin lugar a dudas la significación de este segundo momento de la etapa que analizamos proviene de la fuerza que tomó la idea de los grandes eventos como motor de cambio de la ciudad. A partir de la nominación olímpica de Barcelona en 1986 se comenzó a desplegar un programa integral de recuperación de la ciudad que cambió la escala en los proyectos de intervención. Se iniciaron las grandes obras de infraestructuras como los cinturones de ronda, los túneles de Vallvidrera para la conexión con el corredor del Vallès, la urbanización del frente litoral hasta la Villa Olímpica, y la planificación de las nuevas áreas de centralidad (Glòries, Plaza España, Nou Barris...). En cuanto a las áreas olímpicas, devinieron en puntos estratégicos para la transformación urbana y se comenzó el proceso de transformación de Montjuïc. Estos procesos de transformación fueron definidos como la recuperación de la ciudad, (Borja, 1995), sin embargo, también supusieron relocalizaciones y desapariciones de barrios populares que no siempre fueron visibilizados por los discursos sobre la época.

Si en año 1979, el gobierno municipal frente a la necesidad de poner orden en la maquinaria municipal y desarrollar políticas de ciudad que diesen respuesta a múltiples demandas, se caracterizó por el rigor y la formalidad administrativa en búsqueda de la eficacia, los JJOO marcaron un cambio radical hacia la eficiencia (Ajuntament de Barcelona, 1999). Además de la complejidad de gestión que suponía llevar adelante el programa de grandes transformaciones urbanas, el esfuerzo inversor del ayuntamiento era extraordinario y frente al incremento de la deuda municipal y la decisión de no aumentar la presión fiscal se optó por poner en marcha un proceso modernizador que tendría su esplendor hacia la primera mitad de los años noventa con el objetivo de un funcionamiento más eficiente. Se buscaba optimizar los recursos para no perder calidad en los servicios. Este proceso se relaciona con la entrada en el ayuntamiento de un equipo de técnicos con una lógica de *management* en gestión pública. Profesionales como Francisco Longo, Xavier Sisternas, Ernest Maragall o Antoni Fernández entre otros, llevaron adelante desde diferentes espacios la reorganización de la estructura y lógica administrativa del ayuntamiento incorporando fuertemente objetivos de eficiencia en el diseño y gestión de las políticas de ciudad.

La introducción de lógicas empresariales y la necesidad de nuevas fórmulas de gestión más ágiles y flexibles para la captación de capitales impulsaron la adopción de nuevos instrumentos y organismos de gestión caracterizados por su especialización y autonomía en la gestión de inversiones, gastos e ingresos que impulsó mecanismos de colaboración público-privada. De esta manera la creación de empresas e institutos municipales conformó una nueva estructura organizacional que facilitaba la entrada de capitales privados a la gestión pública. Es así que convivían sociedades privadas municipales, empresas mixtas y organismos autónomos locales con propia personalidad jurídica. Si bien estas fórmulas facilitaban la contratación adaptadas a las necesidades de la gestión de todo tipo de servicios municipales, el ayuntamiento mantenía la responsabilidad de los servicios y de la coordinación integral de toda la gestión municipal.

En correspondencia con la vocación de integrar a los diferentes actores de la sociedad y desde una perspectiva más estratégica, en 1990 se conformó el primer Plan Estratégico (1990) que delineaba

un Plan Económico y Social hacia el año 2000, lo que denota que el cambio de escala no fue solo en cuanto a la envergadura de los proyectos sino también en la proyección a mediano y largo plazo del modelo de ciudad.

También es interesante destacar el impulso de redes internacionales de ciudades que proyectan a las ciudades a una escala internacional traspasando el nivel estatal. Es el caso de Metrópolis, Eurocities, CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) o *Ciutats i Governs Locals Units* (CGLU). Vinculado a ello comienza un movimiento de cooperación internacional que nuevamente tiene a las ciudades y no a los estados como protagonistas.

Hacia el final del análisis de la etapa es necesario preguntarnos por el protagonismo de la sociedad civil a lo largo de estos primeros gobiernos democráticos. Es paradójico que en discursos más cercanos a la época hay autores que destacan a la sociedad civil de esos días como agentes indispensables para la gran transformación al mismo tiempo que hacen referencia a la relativa estabilidad de la estructura social en términos de homogeneidad de demandas y ausencia de conflicto social (Borja, 1995). Pero fue precisamente en esta etapa cuando se inició una crisis del movimiento vecinal. Si bien es cierto que continuaron muchas de la reivindicaciones pendientes, a la vez que aparecen otras ligadas a las nuevas infraestructuras de transportes. Recordemos, por ejemplo, el largo conflicto sobre las rondas en la zona de Nou Barris (Canyelles, Guineueta) que exigía un trazado más amable que no partiera al barrio y mantuvo las obras paradas durante años. También es destacable la denuncia de la situación de pobreza en el centro de una Barcelona nominada para los JJOO a través de la campaña «aquí hay hambre» en Ciutat Vella durante el año 1987. No hay que olvidar que se trató de un momento histórico donde por un lado, el traspaso hacia la gestión municipal de gran parte de los protagonistas de los movimientos sociales urbanos vaciaba las filas del movimiento vecinal y, por el otro, el desencanto mutuo de las asociaciones de vecinos y el fracaso de una nueva gestión basada en una colaboración con la administración generó una sensación de parálisis dentro del movimiento vecinal.

No obstante, es el momento de auge de movimientos asociativos de todo tipo (deportivo, educativo, asistencial, juvenil, etc.) y del voluntariado local. Ejemplos de estas nuevas dinámicas son la

extensión de las AMPAS, la consolidación de un movimiento laico de educación en el tiempo libre o el inicio del movimiento antimilitarista y de insumisión al servicio militar obligatorio.

También aparecen nuevos instrumentos y políticas en relación con el fortalecimiento de la participación. De esta forma se generan las primeras Normas de Participación Ciudadana (1986), los primeros consejos sectoriales municipales (Consejo de la Juventud o Consejo del Bienestar) y desde una perspectiva territorial, integral y comunitaria se inicia el primer Plan Comunitario en el norte de la ciudad, en el barrio de Trinitat Nova que trazó el camino para la extensión de este tipo de intervención.

A pesar de que los datos muestren la persistencia de las desigualdades de renta entre barrios y distritos (mayores rentas Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts-Pedralbes; menores rentas Nou Barris), se debe tener en cuenta que estos años de los primeros gobiernos democráticos tienen un gran impacto en la forma de hacer políticas urbanas en Barcelona. Inicialmente con una agenda pública marcada por las deficiencias y necesidades previas y con un gran apoyo de la sociedad civil fue posible establecer y generar rápidamente sólidas bases administrativas y de legitimidad para profundizar la transformación por lo que se refiere a escala, complejidad y proyección de las políticas de ciudad. Destaca así la conciencia del uso de las políticas de espacio público como herramienta no solo urbanística, sino también social y la atención de los barrios más necesitados a través de políticas de proximidad. En un segundo momento y con un cambio de escala total, el liderazgo público local fue protagonista de incorporar a los sectores privados y públicos de otros niveles administrativos a una transformación compleja y profunda de la ciudad. A través de la modernización administrativa y fuertemente orientados por un proyecto olímpico se generó la transformación urbanística de Barcelona y comenzó a ubicarse en el mapa internacional de ciudades.

### **Ciudad, marketing y cultura (1992 - 1999)**

Esta es una etapa de transición entre la ciudad olímpica y la ciudad globalizada, en la que se sufren las consecuencias de la crisis pos-olímpica y se apuntan nuevas tendencias que caracterizarán la siguiente y última fase. Se trata, pues, de un período de redefinición

de la estrategia de ciudad en la que ganarán peso las estrategias de marketing de ciudad para aprovechar el filón olímpico y potenciar la competitividad económica de Barcelona.

En el período 1992-1994 se produce una fase de reajuste económico. Además de las deudas generadas por la organización de los JJOO, la crisis económica se traduce, en la región metropolitana de Barcelona, por la pérdida del 10% de empleo entre 1992 y 1993 (Trullén, 1998). A partir de 1994 se observa una consolidación de la ciudad como centro de producción de bienes y servicios hacia los mercados exteriores, mientras que en el resto de la región metropolitana se mantiene la actividad industrial policéntrica (Trullén et al., 2002). Barcelona continúa consolidándose como centro regional de negocios, servicios (ocio, cultura, congresos) y turismo.<sup>2</sup> Aumenta la importancia de las dinámicas económicas internacionales y entra en juego la visión metropolitana como elemento de competitividad. Siguiendo la tendencia iniciada a finales de los años setenta, la actividad industrial se descentraliza a favor de la primera y segunda corona metropolitana, mientras que las numerosas fábricas de la ciudad desaparecen o se transforman en equipamientos públicos como bibliotecas, empresas o centros cívicos. A nivel económico, destaca también la apertura de grandes centros comerciales urbanos, convirtiéndose en nuevas áreas de centralidad, y el inicio de las reformas de los mercados municipales. Según Trullén (2001: 6), el nuevo modelo económico de Barcelona se basa en tres elementos: *a)* la estructura polinuclear de la región metropolitana, factor competitivo; *b)* la plena integración en los flujos mundiales de mercancías y servicios; y *c)* una nueva base productiva fundamentada en actividades densas en conocimiento. El desarrollo de una ciudad del conocimiento será uno de los ejes del nuevo modelo Barcelona que se hará visible en la fase posterior.

Con el propósito de rediseñar las líneas de desarrollo económico barcelonés se aprueba, en 1994, el Segundo Plan Estratégico de Bar-

---

2. Si miramos la evolución de la distribución del empleo por sectores de actividad, vemos el crecimiento del porcentaje de población ocupada en el sector terciario (en detrimento del sector secundario): 45,6% en 1971, 58,2% en 1981, 64,7% en 1991, 72% en 1996 y 80,5% en 2002 (Área Metropolitana de Barcelona, 2003).

celona. En este caso se definen cinco líneas estratégicas encaminadas sobre todo a alcanzar un doble objetivo: aumentar la competitividad económica de la ciudad y mantener un buen nivel de calidad de vida y de cohesión social. El esfuerzo para ser competitivos se traduce en una vertiente externa y otra interna. Para fomentar la visibilidad de la ciudad, el ayuntamiento continúa potenciando el liderazgo barcelonés en el ámbito internacional a través de la participación en las redes de ciudades, como Metrópolis o Eurocities. A nivel interno, para mejorar la eficiencia en la gestión municipal se incorporan las nuevas tecnologías de la información e instrumentos de modernización de la gestión. Por ejemplo, mediante la creación de sociedades mixtas (con capital público y privado) para la revitalización de distritos, como ProNouBarris, SA y ProEixample, SA (creadas en 1997) (Ayuntamiento de Barcelona, 1999).

La cultura, entendida en un sentido amplio (arte, patrimonio, espectáculos, moda, diseño), se convierte en esta etapa en el eje principal del desarrollo económico barcelonés. En la línea de la modernización municipal se crea en 1996 el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), que aprueba el Plan Estratégico de Cultura tres años después, con la participación de los distintos actores culturales de la ciudad. Así, se promueve la potencialidad turística de Barcelona con la construcción de nuevos equipamientos culturales tanto en el centro de la ciudad (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona-CCCB, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona-MACBA, remodelación del Liceu, Teatre Lliure, etc.) como en nuevas áreas de centralidad (Plaça de les Arts de Barcelona, en la zona Glòries, con el Auditorio y el Teatro Nacional de Catalunya). La transformación del Port Vell como espacio de ocio y entretenimiento (centro comercial, Acuario, IMAX, multisalas) también sigue esta lógica. Con el objetivo de la mejora del paisaje urbano a modo de atractivo turístico y también para mejorar la calidad de vida de los barceloneses, se crea el Instituto del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (1997) y se impulsan proyectos como la Ruta del Modernismo (itinerario temático) o «Barcelona, posa't guapa» (subvenciones públicas para la rehabilitación de fachadas de edificios) (Rodríguez Morató, 2008).

La dialéctica entre el acento en la competitividad económica y la mejora de calidad de vida se expresa a través de los programas de

regeneración urbana que se realizan en esta fase, como en el barrio del Raval ubicado en el centro histórico de la ciudad. Con el impulso de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, el ayuntamiento decide emprender en 1994 las Políticas de Regeneración Urbana del Raval. Se trata de un proceso de rehabilitación que se convierte en una pieza clave del nuevo desarrollo urbanístico de Barcelona a partir del binomio urbanismo y cultura, con fuerte presencia de capital privado. Así, se transforma el barrio del Raval potenciando la terciarización y el cluster cultural con varios equipamientos (MACBA, CCCB, centro de recursos culturales, etc.) a los que hay que añadir universidades (primero, la universidad privada Ramon Llull y en una fase posterior, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona). La gran reforma urbanística que supone la apertura de un nuevo eje en el corazón del barrio, la Rambla del Raval, transforma para siempre la fisionomía del barrio y atrae nuevos sectores de población como estudiantes extranjeros, profesionales del mundo del diseño, el arte y la moda, etc. El proyecto no es nuevo; en 1985 se había aprobado el Plan Especial de Reforma Interior del Raval (PERI) y el conjunto de Ciutat Vella ya había sido considerado como un Área de rehabilitación Integral dentro del Plan de Rehabilitación Integral de Ciutat Vella de 1986 (Gomà, Rosetti, 1998).

Según diversos autores, este cambio de orientación hacia un modelo emprendedor de ciudad (*entrepreneurial city* según Harvey, 1989) hace que el modelo Barcelona ya no sea tan singular sino que lo hace similar a un modelo más general en el que domina la iniciativa empresarial urbana (Capel, 2005; Borja, 2006). Como afirma Marshall: «La retórica, así como la realidad más reciente podría ser la de muchas ciudades europeas» (2002: 65). Este cambio de orientación coincide con la dimisión en 1997 de Pasqual Maragall a la alcaldía y el relevo de Joan Clos, escogido en las elecciones de 1999. De acuerdo con esta interpretación, habría menos diálogo con las asociaciones de vecinos y el tejido asociativo y más negociación con el sector privado. Para Borja (2006), se trata de un urbanismo de negocios que sirve para financiar el urbanismo ciudadano, al que, en principio, no se renuncia. Para Muñoz (2003), Barcelona se convierte en una marca en sí misma, no solo porque es capaz de vender y popularizar el «modelo Barcelona» a escala internacional sino también porque el espacio urbano sufre un proceso de «brandificación». Es decir, según

el geógrafo, la ciudad se transforma en un gran escaparate comercial de soporte al consumo y las marcas (como lo enuncia la campaña del propio ayuntamiento, «Barcelona, la mejor tienda del mundo»). Simultáneamente a este proceso, el área metropolitana se desarrolla con un modelo opuesto al de ciudad compacta mediterránea. Así, el modelo de urbanización metropolitana es difuso, basado en las viviendas unifamiliares situadas alrededor de autopistas y con una movilidad basada en el vehículo privado, imitando los suburbios norteamericanos y alejándose del modelo que ha hecho famosa la ciudad central (Muñoz, 2003).

Paralelamente a la regeneración del centro histórico de la ciudad, el ayuntamiento continúa con la recuperación y la puesta en valor de zonas «periféricas», como Nou Barris. En el caso del Plan de Desarrollo Comunitario de Trinitat Nova, iniciado en 1996, hay una fuerte presión vecinal debido a la afectación de las viviendas de patologías arquitectónicas como la aluminosis. El ayuntamiento reacciona ante la amenaza de derrumbe de los edificios, símbolo de barrios creados en el desarrollismo que padecen problemas estructurales. A diferencia del Raval, es un proceso menos dirigido por el ayuntamiento y con una mayor participación de asociaciones y otras instituciones públicas (de distrito, provinciales y autonómicas). El modelo de desarrollo comunitario de Trinitat Nova es tomado como ejemplo a seguir para otros barrios periféricos de Nou Barris (Blanco, Gomà, 2002; Blanco, 2005). Los movimientos urbanos de la etapa de pre-transición se han transformado al son de los cambios de la ciudad y de la población; esta se ha estabilizado alrededor de 1,5 millones de habitantes, pero su perfil ha cambiado. Así, distintos factores como el descenso de la natalidad, el crecimiento del precio del suelo y el cambio de residencia a favor de la periferia por parte de población joven explican un envejecimiento más acusado de la población. El encarecimiento de la vivienda (sobre todo a partir de 1998), junto con otros factores sociológicos, provoca la disminución de la tasa de emancipación de los jóvenes entre 25 y 34 años y también de los jóvenes entre 18 y 24 años. El descenso de la natalidad se traduce también en una disminución del número de hogares compuestos por 4 personas y más y de los hogares compuestos por parejas con hijos (López, 2008). A nivel de renta, persisten las desigualdades entre barrios y distritos (mayores rentas Sarrià-Sant Gervasi y Les



Corts-Pedralbes; menores rentas Nou Barris y Ciutat Vella). Estos barrios acogen precisamente los nuevos fenómenos migratorios procedentes del extranjero. De un lado, se observa el inicio de la inmigración de población europea, que se sitúa en la zona alta de la ciudad (Sarrià-Sant Gervasi). Del otro, empieza la llegada de inmigración extracomunitaria, en edad laboral y reproductiva, que se instala mayoritariamente en Ciutat Vella, Sans-Montjuic y Nou Barris (Domingo y Bayona, 2005).

En este contexto, las luchas tradicionales de los vecinos por equipamientos y servicios pierden peso a favor de movimientos centrados en nuevas problemáticas como el envejecimiento de la población, la inmigración, el medio ambiente; siendo temas que surgirán a finales de esta fase y que marcarán la siguiente. Los nuevos movimientos sociales, con vocación transnacional y relacionados con la cooperación internacional, el ecologismo o el antirracismo, cristalizan en la multiplicación de ONG (Campaña 0'7, SOS Racismo, Intermón, etc.), junto con el protagonismo del movimiento Okupa (Bonet y Domingo, 1998). También emergen nuevas iniciativas que fomentan la cooperación ciudadana en un entorno de proximidad, el barrio. Así, aparece en 1998 el primer Banco del Tiempo, modelo de intercambio que se extenderá posteriormente a otros barrios de Barcelona. La dimensión ambiental también aparece en esta fase: en 1993 se crea la plataforma «Barcelona Ahorra Energía», agrupación de diversas entidades ciudadanas que promueve la celebración de una primera audiencia pública sobre estos temas en el ayuntamiento. Este se adhiere dos años más tarde a la Carta de Aalbürg y en 1998 constituye el Consejo Municipal Medio Ambiente y Sostenibilidad, a partir del cual se debatirán los contenidos de la futura Agenda 21 de Barcelona. En relación con el medio ambiente, la movilización a escala metropolitana es patente con la aparición de nuevos fenómenos. De un lado, la «guerra del agua», una movilización vecinal en contra de las subidas en el recibo del agua, que se extiende a diversas poblaciones del área metropolitana. Del otro, surgen nuevos conflictos socioterritoriales generados a raíz de la propuesta de nuevas infraestructuras agresivas con el medio ambiente. Hay varios ejemplos de proyectos que afectan Barcelona y otros municipios y que generan la oposición ciudadana: el Túnel de Horta, la urbanización de la sierra de Collserola, el trazado de una nueva autovía de circun-

valación (el Cuarto cinturón barcelonés) o la implementación del Plan Delta (que supone el desvío del río Llobregat con el objetivo de ganar suelo para la ampliación del puerto, del aeropuerto y de la Zona de Actividades Logísticas). Según Nel-lo (2003), aunque se trate de problemas locales, plantean una intervención a múltiples escalas (local, metropolitana, regional, continental y global).

En efecto, en esta etapa se insinúa el cambio de escala política (de local a metropolitana), cambio que culminará en la fase siguiente. En el Tercer Plan Estratégico de Barcelona, aprobado en 1999, se hace explícita la necesidad de tomar en cuenta toda la región metropolitana de Barcelona como vector de crecimiento. Este cambio de escala se traduce a nivel político-institucional con la creación de distintas iniciativas, empresas y sociedades públicas de ámbito territorial metropolitano. Entre ellas, destacan Barcelona Regional, empresa pública creada en 1993 para pensar proyectos a gran escala, una especie de *think tank* que toma la ciudad como laboratorio. También se crean iniciativas transversales como el Pacto Industrial Metropolitano, una asociación territorial, formada por administraciones, organizaciones sindicales, empresariales y un amplio conjunto de entidades y organismos vinculados al desarrollo económico y a la promoción de la ocupación. Surgida en 1997, fruto de una iniciativa proveniente del Segundo Plano Estratégico de Barcelona, nace con la voluntad de agrupar, en un espacio común de trabajo y de debate, a los principales agentes implicados en la dinámica económica, la formación y la ocupación en la región metropolitana. De entre todas las iniciativas, sin duda la que ha generado un mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos es la creación, en 1997, de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Se trata de un consorcio constituido por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del Transporte que efectúa la cooperación, coordinación y planificación en materia de servicios, financiamiento e infraestructuras de transporte público colectivo. Su ámbito de actuación incluye la región metropolitana ampliada hasta los límites del servicio ferroviario de cercanías, con un total de 253 municipios (superando el número de 164 municipios que definen la región metropolitana). El mayor logro de la ATM es la coordinación del sistema metropolitano del transporte público y la integración tari-

faria de los títulos de transporte, que han ordenado y racionalizado la movilidad metropolitana en transporte público.

En resumen, la etapa de 1992-1999 se caracteriza en sus primeros años por una desaceleración económica y un cambio de orientación municipal en el que la competitividad económica y la eficacia son elementos prioritarios. Barcelona se construye como referente internacional del ocio, del turismo y la cultura, convirtiéndose en un destino de moda. El ayuntamiento recibe en 1999 la medalla de oro del Royal Institute of British Architecture, primera ocasión en que se concede a una ciudad. Sin embargo, parece que el consenso alrededor del modelo de ciudad que tan exitosamente se promueve se está erosionando. La reactivación de la conflictividad ciudadana se vislumbra a finales de esta etapa y se hace especialmente evidente en la fase siguiente.

### **Las tensiones entre la globalización y la proximidad (1999-2007)**

Esta etapa se caracteriza especialmente por el cambio sociodemográfico acelerado experimentado en la ciudad, fundamentalmente por la llegada de población extranjera y la movilidad residencial en la región metropolitana. En el terreno económico y político se acentúa la tensión entre lo global y lo local, entre competitividad-crecimiento económico y la calidad de vida de los residentes. El fracaso del Fórum de las Culturas parece marcar el final de la etapa de los grandes eventos. Con el cambio de alcalde (Jordi Hereu releva a Joan Clos) y la constitución, aunque en minoría, de un bipartito municipal de izquierda (ICV y PSC), se aceleran las políticas de proximidad y de cohesión social que conviven con las grandes operaciones infraestructurales y la impronta del turismo.

En el terreno económico, en el inicio de esta etapa se aprecia una cierta reorientación de la política económica con una apuesta por la cultura y la «economía del conocimiento». Por un lado, en el año 1999 se aprueba el primer plan estratégico de la cultura de Barcelona convirtiéndose en un nuevo sector estratégico de la ciudad. Por el otro, en el año 2000 se aprueba el plan 22@ que impulsa la renovación urbana de la principal zona industrial de la ciudad, el Poblenou, con la intención de atraer talento, crear empresas y de-

sarrollar la innovación en sectores como los *new media*, el diseño, el sector energético o el biomédico. Así, el triángulo formado por la desembocadura del río Besos, la plaza de las Glorias y la nueva estación del TAV en la Sagrera se convierte en la principal área donde se pretende concentrar las empresas de la «nueva economía». Para ello se desarrolla un amplio plan de infraestructuras en la zona y se fomenta no solo la atracción y la creación de nuevas empresas sino también la concentración de instituciones públicas e universitarias. De todos modos, este plan no se desarrolla sin tensiones con los movimientos urbanos por la poca consideración al patrimonio histórico, los posibles efectos en relación a la expulsión de los residentes o por las maniobras especulativas por parte de los agentes inmobiliarios.

Aún así, este período se caracteriza por el aumento continuado del turismo, tanto de ocio como de negocios, sector en continuo auge desde la celebración de los Juegos Olímpicos. Se pasa de 3,8 millones de pernoctaciones en el año 1990 a 13,6 en 2007. El número de hoteles aumenta en el mismo período un 263% y el nombre de camas un 271%. El número de pasajeros de cruceros que pasaron por Barcelona llega a los 1,7 millones, cuando en 1990 esta actividad era muy residual (115.000 personas). Por lo que se refiere al turismo de profesionales (asistencia a congresos, convenciones, etc.), el número de eventos pasa en el mismo período de 373 a 1.775, con un aumento de delegados a este tipo de eventos de casi un 600%. Esta trayectoria sitúa a Barcelona en 2007 como la quinta ciudad con más visitantes de Europa, después de Londres, París, Roma y Madrid (Barcelona Turisme, 2008). Esto supone también una apuesta decidida por el impulso de grandes infraestructuras con el objetivo de consolidar Barcelona como centro logístico y turístico internacional. Se desarrolla la ampliación del puerto y del aeropuerto dentro del denominado Plan Delta, aprobado en la etapa anterior, así como se acelera la llegada del tren de alta velocidad a la ciudad, prevista para 2004 y que no se materializa hasta cuatro años más tarde. Las nuevas infraestructuras configuran también nuevos polos de crecimiento urbano en la Zona Franca, el Hospitalet de Llobregat, con la ampliación de la Feria de Congresos, y en la nueva estación del TAV en la Sagrera, cercana al desarrollo del distrito 22@bcn. El papel del puerto, aunque ha vivido tradicionalmente de espaldas a la ciudad, continúa siendo un agente económico de primer orden, con

una actividad en auge. Así, el tráfico de mercancías pasa de los cerca de 25 millones de toneladas en 1997 a los 50 millones en 2007.

Pero el éxito turístico, aunque muy beneficioso económicamente para determinados sectores, también genera sus costes políticos y sociales. El uso intensivo del espacio público (especialmente en el centro de la ciudad y los monumentos turísticos), la creciente importancia de la imagen y seguridad en la ciudad para el negocio turístico, así como la presión de grupos económicos vinculados a los medios de comunicación, empujan al ayuntamiento a una controvertida ordenanza para regular los usos y comportamientos en los espacios públicos. Frente a la denominada «ordenanza del civismo», aprobada a finales de 2005 por el pleno municipal, se crea una amplia coalición de actores diversos (asociaciones de vecinos, centros sociales, asociaciones de trabajadoras sexuales, organizaciones pro-derechos humanos, grupos de skaters, etc.) en su contra. Se considera que es innecesaria y que criminaliza la pobreza y la disidencia a través de una perspectiva excesivamente securitaria de las problemáticas en el espacio público de la ciudad (Ubasart, 2006). Emergen también conflictos urbanos en contra de proyectos de remodelación urbana que se considera que abren la puerta a la gentrificación o que tienen poca sensibilidad con los residentes actuales, como es el caso del Pou de la Figuera en el Casc Antic o la oposición al «plan de los ascensores» en el popular barrio de la Barceloneta. A nivel de toda la ciudad, se pueden destacar las movilizaciones a favor de una vivienda digna durante el 2006 durante las cuales miles de personas, fundamentalmente jóvenes, salen a la calle para denunciar la burbuja inmobiliaria y la falta de políticas para garantizar el derecho a una vivienda digna amparado por la Constitución.

La estrategia de orientación de la ciudad hacia la atracción de personas e inversiones basada en turismo y la ejecución de grandes proyectos urbanos, sin embargo, tienen un punto de inflexión con la celebración del Fórum de las Culturas en 2004, reconocido posteriormente como un fracaso incluso por sus propios organizadores (Mascarell, 2005). A partir de aquí se suceden las críticas al modelo de ciudad (Delgado, 2005, 2007; UTE, 2004; Capel, 2005; Ecologistes en Acció, 2005), visto hasta entonces como un modelo de éxito de la reconversión de una ciudad industrial a una de servicios con una notable calidad de vida. Muchas de esas críticas se centran en

la excesiva orientación de la ciudad a atraer inversiones, la excesiva influencia de los promotores privados (el caso más paradigmático es el de Diagonal Mar), la falta de una participación real de la ciudadanía, los efectos medioambientales del modelo de desarrollo urbano o la desatención de las necesidades de los residentes, por ejemplo en políticas sociales o de vivienda social. Estas críticas, entre otras causas, se catalizan con el relieve de Joan Clos por Jordi Hereu antes de las elecciones del 2007. Aunque en las elecciones la coalición de izquierdas vuelve a obtener la mayoría, la abstención se sitúa en más del 50% de la población y todos los partidos en el gobierno acumulan pérdidas de votos respecto a las elecciones precedentes.

En este escenario, se acentúan las políticas de proximidad en los barrios. Sin querer ser exhaustivos citaremos algunas de ellas. El ayuntamiento elabora una nueva división administrativa en 73 barrios con el objetivo de facilitar la planificación de servicios y equipamientos, así como fomentar la participación de barrios, con los consejos consultivos de barrio. En términos de participación, esto se suma a los órganos (consejo de ciudad, consejos sectoriales), procesos y mecanismos (audiencias públicas, consultas ciudadanas, uso de las TIC) establecidas en 2002 por la revisión de las normas reguladoras de participación ciudadana de la ciudad. Esto nos sitúa en un mapa complejo y poco coordinado de órganos, procesos y mecanismos de participación en la ciudad. Una diagnosis reciente del propio ayuntamiento revelaba que estos procesos conseguían un bajo impacto en las políticas, a la vez que ponía de manifiesto que los ciudadanos a menudo desconocían la existencia de los procesos y mecanismos de participación (Ajuntament de Barcelona, 2009).

A nivel de equipamientos y espacios públicos, si bien el Ayuntamiento de Barcelona ha seguido una política continuada de creación de equipamientos (escuelas, centros de servicios sociales, guarderías, etc.) y recuperación de espacios públicos (parques, patios interiores en el ensanche, etc.), destacamos a lo largo de este período el plan de bibliotecas 1998-2010 elaborado conjuntamente con la Diputación de Barcelona. Este plan, más allá de una importante extensión del número de bibliotecas en 2007 (desde 1998 los metros cuadrados habían aumentado un 425% y los préstamos un 435%) supone una nueva conceptualización de este equipamiento: mucho más

polivalente y próximo y con la intención de adaptar las bibliotecas a las nuevas necesidades diversas de la población (incorporación de espacios para niños y jóvenes; actividades formativas y de difusión cultural; acceso público a las TIC, etc.)

También se refuerza el comercio de proximidad a través de potenciar ejes comerciales en los barrios (aunque a la vez se inauguren nuevos centros comerciales) y se sigue con la reforma de los mercados municipales, si bien los de Ciutat Vella adquieren una clara orientación turística. En algunos de los barrios desfavorecidos, como son el Casc Antic, Roquetes, Poble Sec, Torre Baró - Ciutat Meridiana, Trinitat Vella, el Coll y la Bordeta,<sup>3</sup> se potencia o se completa su regeneración integral a través del Fondo de Barrios de la Generalitat de Catalunya, conocido como la Ley de Barrios, a la vez que los planes de desarrollo comunitario se extienden a muchos barrios de la ciudad, no solo a los barrios periféricos o con problemas. Se planean también nuevos barrios como el de la Marina en la Zona Franca, a partir de los criterios de mixtura, densidad y compacidad que caracterizan el discurso urbanístico municipal. Más allá de las iniciativas de la administración, también durante este período se extienden en los barrios proyectos vecinales de cooperación social vinculados al intercambio de conocimientos y bienes (bancos de tiempo, mercados de intercambio) y al consumo ecológico y responsable (cooperativas de consumo agroecológico) a nivel de barrio. Especialmente estas últimas han tenido un importante crecimiento en los últimos años estableciéndose en todos los distritos de la ciudad (Ubasart, 2009).

Finalmente, en políticas de movilidad, destaca la implantación, por un lado, del área verde que regula el estacionamiento en superficie dando prioridad o exclusividad a los residentes y, por el otro, el servicio público de bicicletas «bicing» con un gran éxito de acogida aunque con críticas debido a su bajo mantenimiento. Respecto a las mejoras de movilidad también cabe destacar a nivel de área metropolitana la recuperación del Tranvía en ambos extre-

---

3. Estos barrios fueron beneficiados con la Ley de Barrios dentro del período 2004-2007. En años posteriores otros barrios de la ciudad también recibieron este fondo de la Generalitat de Catalunya.

mos de la ciudad y a la construcción de una nueva línea de metro (L9) que, desde Badalona hasta el Prat de Llobregat, conectará el aeropuerto con la nueva área ferial en el Hospitalet y la estación del TAV en la Sagrera.

Por lo que se refiere a la configuración socio-demográfica, en estos años la población de Barcelona, como otras ciudades españolas, cambia rápidamente. Después de 20 años perdiendo población, el número de habitantes de la ciudad empieza a recuperarse a partir del 2001. Fundamentalmente esto es debido a la llegada de personas de nacionalidad extranjera. Desde el año 2000 a 2007 aumentaron un 139%, representando el 15,7% de la población al final de este período. Debido a que el contingente de población inmigrante se sitúa en la franja de edad de reproducción, se han modificado los índices de fecundidad y de envejecimiento del conjunto de la ciudad. Como consecuencia del mercado de vivienda y de las cadenas migratorias preexistentes, esta población no se distribuye uniformemente en la ciudad sino que se localiza sobre todo en el centro histórico y en los barrios periféricos, los mismos barrios que en su día acogieron la mayoría de los flujos de migración interna. Aún así, aunque las desigualdades socio-territoriales persisten, en este período no se acentúan, sino que incluso se registra una leve disminución de las desigualdades: entre el año 2000 y 2005 la distancia entre las zonas de mayor y menor nivel de renta de la ciudad bajó de 6,8 a 5,7 (Calvo, 2008).

Además de la inmigración, otro factor que explica la importante renovación de población que ha experimentado la ciudad en la última década es la continuada movilidad residencial. Esta ha sido protagonizada principalmente por población entre 30 y 45 años que se ha ido de Barcelona hacia la segunda corona metropolitana para mejorar su vivienda habitual o para formar un nuevo hogar. Efectivamente, entre el año 2001 y 2006 la diferencia entre las altas y las bajas de población en la ciudad de Barcelona se sitúa en -34%. En cambio, si nos situamos en la segunda corona y el resto de la provincia, el diferencial es del +37%, siendo los municipios más pequeños quienes absorben las nuevas llegadas de población (Miralles, Donat y Barnada, 2007: 38). La movilidad residencial, obviamente, tiene importantes implicaciones en la ocupación del suelo, el consumo de recursos y en la movilidad cotidiana de la población. A la vez, la relación entre los diferentes nodos urbanos



se complejiza y los límites de la región metropolitana se hacen cada vez más difusos.

Así, entre lo local y lo global, lo regional adquiere una importancia creciente. No solo respecto a la política económica, como hemos visto abordada a través del Plan Estratégico Metropolitano, sino también a la hora de coordinar servicios, políticas y abordar las desigualdades socio-territoriales que cada vez se producen y reproducen una escala mayor que la municipal. La creciente interdependencia entre los municipios de la región pone de manifiesto la necesidad de una gobernanza regional y metropolitana más allá de la gestión de servicios. A nivel de Barcelona ciudad las políticas públicas se apoyan en nuevos instrumentos para afrontar de una forma más eficaz la realidad más compleja. En este período es de destacar la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona en 2006, nueve años después que fuera aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Esta nueva ley reconoce el estatuto especial de Barcelona como gran ciudad y amplía las competencias municipales en, por ejemplo, aspectos tributarios y de justicia de proximidad. Con el cambio de gobierno en la Generalitat en 2003 y el impulso de la Carta Municipal que así lo establece, se acelera la creación de consorcios para mejorar la cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento en políticas sociales, educativas, de vivienda y sanitarias. Sin embargo, a nivel metropolitano los instrumentos son mucho más débiles. El principal avance será ya en 2009 con la constitución del Consorcio del Área Metropolitana de Barcelona, formado por 36 gobiernos locales del área de Barcelona que participan en las distintas autoridades metropolitanas (Mancomunidad de Municipios de Barcelona, Entidad Metropolitana de Medio Ambiente y Entidad Metropolitana de Transporte).

## Conclusiones

Barcelona ha experimentado, como otras grandes ciudades españolas, una rápida transformación en las últimas décadas. Ha pasado de ser una ciudad industrial que recibió una importante migración interna durante los años del desarrollismo a una ciudad turística y de servicios inserida completamente en los flujos globales (de capital, de congresistas, de trabajadoras sexuales, de turistas, de estudiantes,

de trabajadores y trabajadoras legales e ilegales, etc.). En este devenir Barcelona ha experimentado importantes cambios tanto en la ciudad construida como en la ciudad habitada. Sin duda un punto de inflexión, tantas veces señalado, fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Sin embargo, la ciudad de los primeros años de la década de los ochenta, con la lenta recuperación democrática y el impulso del movimiento ciudadano, se volcó en intentar resolver los déficits sociales y urbanísticos heredados del franquismo en los barrios. El desarrollo urbano se había basado principalmente en la expansión de las infraestructuras del automóvil, la represión política, el abandono del centro histórico, la especulación y los grandes polígonos de viviendas infradotados como alternativa al acuciante barraquismo. De todos modos, en los últimos años de la dictadura se preparó y aprobó el plan de ordenación urbana que aún está vigente en la actualidad pese a sus innumerables modificaciones posteriores: el PGM de 1976. Este plan, aunque con una clara lógica de crecimiento, pretendía poner freno a los grandes proyectos especulativos del limitado Plan Comarcal, reservar importantes bolsas de suelo público y ordenar una realidad ya evidente, la Barcelona Metropolitana.

Frente a la lógica del plan de ordenación es bien sabido que la planificación de la ciudad a partir de entonces se ha articulado, por un lado, a través de proyectos que progresivamente han ido aumentando de escala y, por el otro, a través de la figura del plan estratégico actuando como modelo de concertación de los principales agentes urbanos. La estrategia urbana de los JJOO no es más que un conjunto de proyectos urbanos (Vila Olímpica, Montjuic, Horta, etc.) e infraestructurales (rondas de circunvalación, mejora alcantarillado, etc.) más o menos coordinados entre sí. Alrededor de este proyecto de proyectos que implican una nueva etapa modernizadora de la ciudad se da una comunión casi perfecta (la disidencia es pequeña y completamente marginada) entre las élites políticas, económicas e intelectuales de la ciudad que reciben un notable apoyo ciudadano. La modernización también llega a la administración pública de la mano de la nueva gestión pública y del marketing urbano. Aunque el tamaño de la administración local no deja de crecer para afrontar nuevas demandas, se crean un sinnúmero de nuevas agencias, algunas de ellas con capital íntegramente público, otras de ellas con

participación privada. Efectivamente, se aprecia durante los años noventa un aumento de la influencia del capital privado inversor en las políticas urbanas de la ciudad, ejerciendo tanto como lobby de presión externo o bien directamente intrincado en las redes de gobernanza local.

Una vez asentada la conversión de la ciudad industrial a una de servicios (en el que el puerto, el aeropuerto, la Feria, la cámara de comercio, el sector hotelero y en menor medida las universidades, juegan un papel clave en la configuración del régimen local), se pretenden consolidar nuevas estrategias de desarrollo urbano basadas en la formación, el diseño, las nuevas tecnologías, el sector médico y biomédico, así como en el sector cultural. Buena parte del antiguo sector industrial de la ciudad se encamina hacia esa dirección, consolidándose un urbanismo empresarial que dedica muchos esfuerzos a promover la imagen y la economía de la ciudad. Sin embargo, una mayor distancia entre las élites políticas y la ciudadanía, los efectos del turismo masivo y los megaproyectos como el Fórum de las Culturas de 2004, provoca que emerja una crítica hacia el modelo Barcelona hasta entonces casi inexistente. Queda evidente que las tendencias del urbanismo neoliberal y *gentrificador* están presentes también en las ciudades gobernadas por la izquierda si bien las políticas de atracción y crecimiento se pretenden combinar con la mejora de las condiciones de vida. Las tensiones entre la ciudad extrovertida e internacional y la ciudad de los barrios y entre las políticas económicas y las políticas sociales se acentúan en un momento en que progresivamente estas divisiones van perdiendo sentido. La ciudad se enfrenta a retos importantes: el envejecimiento de la población, el cambio de las estructuras familiares, la inmigración, la centrifugación metropolitana, las nuevas lógicas con las que opera la exclusión social, la mayor preocupación por la sostenibilidad ambiental, etc. Frente a este escenario se activan nuevas políticas de participación y cohesión social en los barrios que se mezclan a veces de forma contradictoria y compleja con las políticas del urbanismo empresarial.

Así, en la actualidad la ciudad de Barcelona se enfrenta a numerosos retos, entre los cuales destacamos tres. El primero es la capacidad de reinventarse una vez más antes de que la ciudad turística y de servicios muera de éxito. Es decir, asentar y diversificar su

base económica en un contexto de crisis para que sea suficiente para satisfacer las demandas ciudadanas en términos de trabajo, bienestar, cohesión social y sostenibilidad socio-ambiental. Hacerlo sin que el atractivo exterior no acabe con el bienestar interior o acentuando las desigualdades socio-espaciales. Sin que la creatividad social generada colectivamente sea sustraída en el mercado internacional por su valor de cambio. El segundo reto es encontrar los instrumentos de gestión y de gobernabilidad democrática para afrontar los retos de una región urbana cada vez más integrada que se caracteriza, a pesar del peso de la ciudad central, por su acentuado policentrismo. Este escenario hace necesario que las políticas de sostenibilidad, movilidad, promoción económica, de regeneración urbana, entre muchas otras, se piensen más allá de la escala local. Finalmente, el encaje de la ciudad en relación con su contexto macroregional, tradicionalmente en competencia con Madrid, y su proyección hacia el Mediterráneo no se ha consolidado desde la recuperación de la democracia. La reciente capitalidad desde la Unión por el Mediterráneo podría generar un nuevo impulso hacia esta dirección.

#### Cuadro 1

##### LA ALTERNATIVA URBANA: EL ENCUENTRO ENTRE VECINOS, INTELLECTUALES Y TÉCNICOS

En la Barcelona de los años sesenta, la discusión y la preocupación sobre el futuro de la ciudad comenzó a generar visiones alternativas a la oficial. Lo urbano era un tema de interés entre los intelectuales y universitarios, que poco a poco formaron corrientes de opinión en consonancia y colaboración con los barrios. También algunos sectores religiosos con inquietudes sociales colaboraban en la búsqueda de alternativas conjuntas en los barrios populares. Se trataba de un nuevo estado de movilización cultural en el que surgieron grupos como el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Comunitario (CEDEC) que aportaron informes y estudios claves para la grave situación social que se vivía en muchos barrios. También la Oficina de Información Urbanística, desde la cual el Colegio de Arquitectos abrió sus puertas a la comunidad, fue muy importante a la hora de asesorar e informar en una especie de consultoría comunitaria. La Revista del Colegio de Arquitectos, *Quaderns* incorporó una sección de movimientos urbanos a finales de los sesenta y principios de los setenta. De igual manera colaboraba el Colegio de Aparejadores en la redacción de informes y asesorías para los barrios. Los monográficos de

su *Revista CAU* (Construcción, Arquitectura y Urbanismo), en los que participaba todo un conjunto de técnicos comprometidos con una nueva visión de la ciudad, marcaría la historia urbana y política de Barcelona. Números como los dedicados a «La Barcelona de Porcicles» , el «hecho Urbano en Barcelona» o «la lucha en los barrios» tuvieron especial impacto en todo el MSU. A partir de 1973, el CEU (Centro de Estudios Urbanos) posteriormente CEUMT (Centro de Estudios Urbanos, Municipales y Territoriales) fue el principal ámbito de encuentro entre técnicos y líderes vecinales. La revista, los seminarios, las asesorías y más tarde los manuales desempeñaron un papel importante en la reflexión ciudadana democrática, que influyó considerablemente en la política municipal de los años setenta y en la década del ochenta. Este encuentro entre intelectuales, técnicos y líderes barriales permitió que las reivindicaciones se levantaran como denuncia del régimen dictatorial, y en cada caso también se denunciara un modo capitalista de hacer ciudad. Los vecinos tenían la palabra, pero no estaban solos.

## **Cuadro 2**

### **EL PLAN MUNICIPAL POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL ACUERDO CIUDADANO PARA UNA BARCELONA INCLUSIVA**

En el año 2002, el Consejo Municipal de Bienestar Social aprobó la propuesta de elaboración de un plan de actuación social para abordar las situaciones de pobreza y de exclusión social en la ciudad. En el año 2003, la Comisión Europea establece una dimensión territorial subnacional, como un componente básico de la Agenda Social Europea. La elaboración del plan se realizó con un esfuerzo importante de transversalidad interna con la participación de los ámbitos municipales de Bienestar social, cultura, vivienda, derechos civiles, mujer, Educación, Salud, Juventud, Deportes, Ocupación y Urbanismo.

El plan se estructura en cinco principios rectores, 6 líneas estratégicas (un sistema público y universal de servicios sociales y atención a la dependencia; la atención social primaria como dispositivo básico de inclusión en el territorio; la atención social especializada como dispositivo de inclusión de colectivos vulnerables; programas de inclusión transversales; la participación y la acción comunitaria; el conocimiento intercambio y cooperación), 12 objetivos operativos y 37 acciones.

Este plan municipal para la inclusión social 2005- 2010 es aprobado en 2004 por el pleno municipal. Como se apunta en el mismo plan: «con esta medida el consistorio pretende superar el paradigma asistencial de bienestar social mediante una asunción reflexiva y práctica de un modelo preventivo, proactivo y promotor de las condiciones de desarrollo humano, con el objetivo de que todo el mundo pueda realizar, en unas condiciones reales de igualdad, su proyecto de vida».

El plan se complementa con el «Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva» que se configura como un instrumento de gobernanza para el desarrollo en el plan con la implicación del tejido asociativo de la ciudad. Así, el plan se plantea como un espacio de diálogo y de concertación alrededor de las estrategias de inclusión con el objetivo de generar conocimiento, desarrollar nuevas políticas y articular mejor las existentes. La signatura del acuerdo conlleva:

- compartir los objetivos generales del plan
- participar en los grupos de trabajo
- compartir experiencias y conocimiento
- concretar proyectos y compromisos de acción
- desarrollar el trabajo en red

En relación a este último punto se impulsan diferentes redes temáticas de acción para profundizar el trabajo común en diferentes aspectos. Cada una de ellas, según sus propios objetivos, comparte una forma propia de trabajar. En la actualidad existen 5 redes temáticas: red de atención a personas sin techo; red de centros abiertos de atención a la infancia y a la adolescencia; red de inserción sociolaboral; red de acogida y de interculturalidad; red de apoyo a familias cuidadoras y red B3 (Barcelona, Beneficios y Bienestar). Actualmente hay un total de 420 entidades que se han comprometido a trabajar conjuntamente, cada una en la medida de sus posibilidades, por el desarrollo de la inclusión social en la ciudad.